

# Crónica del mes

Septiembre

Definitivamente, desde el día posterior a las elecciones presidenciales de 2004, las principales fuerzas políticas del país iniciaron la competencia por agenciarse el mayor apoyo en los comicios legislativos y municipales de 2006. Septiembre de 2005 marca un paso más allá de la mitad de esa competencia y encuentra a los partidos políticos en plena actividad para garantizar aquel apoyo. La primera fuerza del país, ARENA, se halla fortalecida: es dueña del Ejecutivo, de una numerosa y consistente fracción legislativa y de importantes bastiones municipales; además, utiliza una estrategia publicitaria bastante coherente —dicho al margen del juego sucio que utiliza—, que le ha permitido posicionarse en el electorado salvadoreño como la principal fuerza política. Su principal contrincante, el FMLN, por el contrario, parece estar condenado a ser la eterna segunda fuerza, a pesar de haber aumentado su caudal de votos en la pasada elección presidencial. A diferencia del oficialismo, el FMLN se desangra por la enésima división interna, que le ha llevado a disminuir su fuerza legislativa y municipal. Durante el mes de septiembre, la fracción legislativa efemelenista se redujo a 24 miembros, cinco por debajo de ARENA, y perdió tres alcaldes clave en el Área Metropolitana de San Salvador: el de la capital, el de Mejicanos y el de Nejapa. Antes había renunciado el alcalde de Santa Ana, al verse impedido a reelegirse por la cúpula de su mismo partido. El horizonte no pinta optimismo para el partido de izquierda, en contraste con las caras felices de sus dirigentes, que se niegan a aceptar la realidad.

En ese escenario, el primer día de septiembre, la cúpula del partido ARENA, el COENA, presentó sus candidaturas para ocupar su fracción en la legislatura que se definirá en las elecciones de marzo de 2006, guardando su puesto a la gran mayoría de actuales diputados. La definición se hizo por el

famoso “dedazo” debido a que, desde junio pasado, representantes de la cúpula partidaria manifestaron que se echaban para atrás en el prometido mecanismo de elecciones primarias para designar las candidaturas a cargos públicos. “No queremos que por correr, o aspirar algo que todavía nuestra institucionalización no permite hacer, acabe en un fiasco”, había asegurado César Funes, del COENA, el 23 de junio pasado. ARENA se declara en campaña. “Ya estamos en campaña. Desde el 22 de marzo hemos iniciado una fuerte campaña casa por casa”, aseguró el vicepresidente de Ideología de ARENA y también ministro de Gobernación, René Figueroa, para iniciar con pie derecho el mes de septiembre.

Por el contrario, daba comienzo una nueva escisión en el FMLN. El día 2, el alcalde de San Salvador, Carlos Rivas Zamora, renunciaba oficialmente a su partido, mismo que le llevó al poder en el 2003; pero el alcalde declinó participar en el Frente Democrático Revolucionario (FDR), partido en formación del que ya había recibido ofertas electorales. Rivas Zamora se hizo acompañar de un centenar de simpatizantes del partido en formación mientras hacía pública su renuncia. Otros alcaldes efemelenistas, René Canjura y Carlos Menéndez, de Nejapa y Mejicanos, respectivamente, anunciaron la posibilidad de seguir los pasos de su colega capitalino. Mientras tanto, el candidato arenero para disputarse la municipalidad de San Salvador, Rodrigo Samayoa, perdía el tiempo y hacía campaña proselitista en varios lugares de la capital, pese a que la campaña no ha comenzado oficialmente.

La sangría en el FMLN continuaría durante los siguientes días. El 6, tres legisladores efemelenistas, Celina de Monterrosa, Arnoldo Bernal y Héctor Córdoba, anunciaban su renuncia a ese partido político y su incorporación al FDR, que todavía busca su legalización. La salida de los diputados

redujo a 24 miembros la fracción del FMLN, de los 31 que iniciaron la presente legislatura. Por otro lado, la incorporación al FDR de los disidentes integraba un bloque de 15 diputados formado por miembros del CD, el PPSC y el mismo FDR, que se acercarían para trabajar temas en común dentro de la Asamblea Legislativa.

El día 16, el alcalde de Mejicanos, Carlos Menéndez, anunció su retirada del FMLN e incorporación al FDR, junto con varios miembros de su concejo municipal. Dos días después, el 18, le seguía el alcalde de Nejapa, René Canjura. "A partir de este día dejo de pertenecer al FMLN, pero no voy a presentar una carta de renuncia porque no la leen, y lo que decís les da risa", dijo el ahora ex efemelelista, que se inició en 1972 en las filas del Frente Popular de Liberación (FPL). El FMLN cerraba el mes viendo disminuida su fuerza legislativa y municipal, pero no se quedaría de brazos cruzados: antes que terminara septiembre, el jefe de la fracción, Schafik Handal, introdujo a la directiva de la Asamblea una iniciativa que buscaba quitar el voto en las comisiones a los disidentes de su partido. Handal, alegando "pérdida de confianza", logró su cometido, en una estrategia que introduce la venganza en las turbias negociaciones políticas legislativas.

Otro asunto de interés nacional con el que inició el mes fue lo referente a una resolución fechada el pasado 9 de junio, en la que 10 magistrados de la Corte Suprema de Justicia votaron a favor de quitarle a la Sección de Probidad de su misma Corte la facultad de indagar en la banca sobre el patrimonio de funcionarios públicos. La polémica resolución se dio en el marco de una indagación regular sobre el patrimonio del ex presidente Francisco Flores y de parte de su gabinete. Según investigaciones de la prensa nacional, el primer caso que se descubrió fue el del ex presidente de ANDA, Carlos Perla. El caso produjo el enfrentamiento público entre defensores y detractores de la resolución, estos últimos con el apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil y de los magistrados que no votaron a favor de la reforma, entre quienes destacó René Fortín Magaña.

En ese marco, el día 2, la integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo, Sandra de Barraza, increpó, desde su columna de opinión en un medio de prensa escrita, al fiscal general de la República, Belisario Artiga, para que actuara de oficio en el caso de la sección de Probidad de la Corte Supre-

ma. Barraza escribió lo siguiente bajo el título "Lúzcase, fiscal": "la petición presentada al fiscal general de la República por el doctor René Fortín Magaña, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es de lectura obligada. En un escrito de 27 páginas con anexos, el día 18 de agosto del presente año, en una acción sin precedentes, el Dr. Fortín Magaña le solicita al fiscal general de la República que ejerza la acción de nulidad absoluta en contra de los acuerdos inconstitucionales e ilegales que suprimen las atribuciones que, por ley y a iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, le fueron otorgadas a su Sección de Probidad por decreto legislativo n° 238, publicado el 1° de septiembre de 1992 en el *Diario Oficial*. La petición —continúa de Barraza— la hace como ciudadano en el ejercicio del derecho que le otorga el artículo n° 18 de la Constitución de la República que dice: 'Toda persona tiene derecho de dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelva y a que se le haga saber lo resuelto'. El escrito es decoroso y hasta elegante. Su razonamiento es magistral, profesional y educativo. Su demanda es respetuosa a la institucionalidad y a la democracia. A diferencia de los que optan por quemar llantas, tomarse las calles, pintar y destruir la propiedad privada y pública, su denuncia y petición es pacífica y desafiante a la academia, a la intelectualidad, a la institucionalidad y al mismo Estado de Derecho [...] Esta petición no puede ni podrá quedarse sin respuesta. El fiscal general de la República, simple y sencillamente, no tiene opción. Debe, por obligación constitucional, resolver y responder a tan contundente y razonada petición. Y lo tendrá que hacer con el mismo estilo. Nadie puede ni debe esperar menos", concluye la columnista.

El 5, como queriendo poner una cortina de humo a las acusaciones contra funcionarios señalados en el caso de la Sección de Probidad de la Corte Suprema, *La Prensa Gráfica* empezó una serie de entregas que señalaban irregularidades detectadas por la Corte de Cuentas de la República en la administración del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos del 2002 (COSSAL), presidido por Enrique Molins hasta el año siguiente. Según la fuente citada, la Corte de Cuentas no encontró respaldo legal de varios desembolsos por el orden de 1 millón 825 mil 160 dólares. La prensa escribe sobre "obras fantasma", "anticipos monetarios no liquidados" y "falta de respaldo en la contratación de créditos internacionales".

Ese mismo día, el ministro de Gobernación, René Figueroa, confirmó la existencia de otra serie de irregularidades, esta vez en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), por el ingreso de 23 policías que tomaron un curso para obtener el título de subinspectores. No obstante, el funcionario intentó, por todos los medios posibles, minimizar la anomalía. “No nos mostraba ilegalidades, nos demostraba errores administrativos, es muy aventurado [hacer señalamientos graves] porque aun no hay un informe concreto”, dijo el titular de Gobernación. En esa línea, días después, el 15 de septiembre, el periódico digital *El Faro* sostiene que “tras conocerse el caso de 23 oficiales que supuestamente ingresaron a la corporación policial bajo un proceso fraudulento, los titulares de Gobernación calificaron el hecho de ‘una situación aislada’. La semana pasada —prosigue la fuente periodística— las autoridades salieron al paso de las denuncias, dejando clara su postura a favor del director y subdirector de la ANSP y defendiendo el proceso mediante el cual se graduaron los policías señalados. De acuerdo con René Figueroa, ministro de Gobernación, el problema se debe a que los 23 aspirantes a oficiales reprobaron algunas pruebas de admisión y luego decidieron apelar los resultados [...] Sin embargo —concluye la fuente—, aunque el proceso de apelaciones es normal y válido en la ANSP, ninguno de las autoridades ha explicado por qué los exámenes definitivos que se les practicaron a estas 23 personas no tenían las firmas de la comisión que supuestamente los revisó. El subdirector de la institución, Rafael González Garciaguirre, también ha sido señalado de ser la persona que ordenó validar el ingreso a los cursos y posterior graduación de los 23 aspirantes, a pesar de haber reprobado entre una y tres de las pruebas requeridas”.

*El Faro* va más allá: “mientras Gobernación insiste en que el tema de las irregularidades en estos ascensos ‘no es grave’, otros sectores ya se han pronunciado en contra de la situación, pidiendo incluso el despido de los titulares de la ANSP. Algunas de estas posturas se hicieron evidentes en la sesión plenaria del miércoles 10, cuando el FMLN presentó una pieza de correspondencia en la que pedían la destitución de los directivos de la academia policial. En el pleno, las opiniones de las diferentes bancadas de oposición estuvieron bastante unificadas en torno a la problemática de la ANSP. A diferencia de lo expresado por Gobernación, la mayoría de parlamentarios coincidió en estimar que se trata de ‘una falta grave’. Sin em-

bargo —concluye la nota de *El Faro*—, ARENA y PCN solamente se mostraron a favor de que se realice la investigación correspondiente, no así la destitución de los titulares de la ANSP”. De acuerdo con la misma fuente periodística, los 23 policías graduados, ahora subinspectores, se hallan prestando servicio actualmente en la PNC, ante lo cual se quejó el subdirector de la PNC, Pedro González: “nosotros lo que revisamos es si esas personas [que ascienden] tienen su diploma de la ANSP. No sabemos más atrás”, aseguró González.

Por otro lado, en materia de política internacional, el día 14 inició la sexagésima Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que participó el mandatario salvadoreño, Elías Antonio Saca. En el evento de inauguración, el secretario general de ese organismo, Kofi Annan, sostuvo, dirigiéndose a los representantes de más de 180 países que “por primera vez, aceptarán, claramente y sin ambigüedades, que a ustedes les cabe la responsabilidad colectiva de proteger a los pueblos del genocidio, de los crímenes de guerra, de la depuración étnica y de los crímenes contra la humanidad. Pondrán en claro que están dispuestos a adoptar medidas colectivas oportunas y decisivas por intermedio del Consejo de Seguridad, cuando los medios pacíficos resulten inadecuados y sea manifiesto que las autoridades nacionales no están protegiendo a su propia población”. El secretario general añadió que “ya se trate de acometer el establecimiento de la paz, la construcción de naciones, la democratización o la respuesta a desastres de origen natural o humano, hemos observado que ni siquiera los más fuertes entre nosotros pueden salir adelante por sí solos. Al mismo tiempo, ya se trate de luchar contra la pobreza, poner fin a la propagación de enfermedades o salvar vidas inocentes de asesinatos en masa, hemos observado que no llegaremos a feliz término sin el liderazgo de los fuertes y la participación de todos”.

Mientras la cumbre de la ONU entraba en calor, el día 15, el país celebraba el 184° aniversario de su independencia del dominio español. En el marco de los actos oficiales, el presidente Saca leyó su discurso alusivo en el que aseguró que el país se encuentra en la senda del desarrollo. “Debemos seguir avanzando en la senda del desarrollo y progreso que decidimos tomar hace más de quince años”, dijo el mandatario. Las palabras del presidente estaban encaminadas a justificar las políticas realizadas por los pasados gobiernos de ARENA, como tam-

bién las de su gobierno: "por este país que vale la pena, hemos trabajado durante los últimos quince meses. Por este país, nos hemos dedicado a trabajar sin descanso, a seguir escuchando a la gente, y sobre todo a cumplir nuestras promesas", añadió. El presidente también destacó que al país le augura un futuro prometedor si se logran vencer las adversidades y ganar la batalla a la desesperanza. En resumidas cuentas, sostiene el mandatario, que el país está en el camino correcto que conlleva hacia el desarrollo desde hace quince años, y con lo que está haciendo el gobierno actual, en el futuro estará mucho mejor.

Al día siguiente, Saca se hallaba en Nueva York para sumarse a la cumbre de las Naciones Unidas. El mandatario aprovechó el corto espacio que le concedieron para insistir en su ya conocido reclamo por la marginación que la cooperación internacional ha hecho de El Salvador, al encontrarse este entre los países de renta media, lo cual merece unas líneas y es que desde hace ya algún tiempo, gobiernos y agencias donantes han sacado al país de forma progresiva de la lista de los beneficiarios de su ayuda, la cual tiende a concentrarse en otros lugares donde hay más necesidad, como en los países de África, por ejemplo. Esto significa que El Salvador no se encuentra en la lista de los países más pobres del mundo, de acuerdo con el criterio de su ingreso promedio, el cual se calcula dividiendo el total del ingreso nacional entre el número de habitantes. Pero claro está, esa renta promedio no es recibida por todos y cada uno de los y las salvadoreñas, ni siquiera la recibe la mayoría, porque se encuentra concentrada de una forma abrumadora en unos cuantos privilegiados que la acaparan. Es así como, pese a no ser clasificado como país pobre, de lo cual los gobiernos de ARENA hacen alarde cuando les conviene, El Salvador no cuenta con los recursos mínimos para comenzar a financiar en serio las llamadas metas del milenio, las cuales pretenden mejorar sustancialmente las condiciones de salud, educación, vivienda y, en general, el nivel de vida de la población, cuya revisión fue uno de los motivos principales del encuentro de la ONU. Dicho de otra forma, para efectos prácticos, El Salvador es un país pobre, que no puede garantizar los servicios sociales básicos a la mayoría de sus habitantes.

No obstante, el presidente Saca tiene razón cuando, ante la comunidad internacional, reunida en la Asamblea General de las Naciones Unidas

con motivo de los sesenta años de esta institución, echó en cara la falta de compromiso de los países industrializados con los países empobrecidos del sur. Los primeros poseen mucho más de lo que realmente necesitan para vivir con dignidad y han demostrado ser, además, muy egoístas. No están dispuestos a renunciar a su buena vida ni a abandonar su comodidad, para compartir con quienes experimentan graves y grandes necesidades. Las declaraciones de apoyo a los países empobrecidos no faltan, incluso hacen compromisos concretos pero, al final, dan poco y siempre dan de aquello que les sobra.

Pero la exclusión de El Salvador no es arbitraria, puesto que Naciones Unidas acordó concentrar la ayuda económica en aquellos países con una renta media baja, condición que el país ya no cumple. Esta decisión obedece a que países con una renta como la de El Salvador actual, pueden financiar con sus propios recursos, incluidos los del capital privado, la inversión social necesaria para cumplir con las metas del milenio. Dada la existencia de un ingreso nacional moderado, una distribución más equitativa del mismo podría proporcionar buena parte de ese financiamiento. Esa distribución, además, evitaría la enorme desigualdad predominante entre aquellos que acaparan la mayor parte del mismo y aquellos otros que deben conformarse con lo que sobra a los primeros, o como suelen decir, con lo que se logre derramar de su vaso. El ingreso nacional se redistribuye con una carga impositiva mucho mayor a los que lo acaparan casi en su totalidad. Con este dinero se podrían financiar bastantes de los programas sociales que al gobierno de ARENA le gustaría llevar a cabo. El capital privado, por otro lado, también debe contribuir con lo suyo e invertir en el país, aun a costa de obtener menos ganancias que si invirtiera en el exterior. De hecho, es contradictorio que los administradores de los fondos de pensiones pidan autorización para invertir el dinero salvadoreño fuera, mientras que el gobierno de ARENA se afana por conseguir inversión extranjera fresca para el país.

O sea, el financiamiento para los programas sociales gubernamentales existe. La cuestión es qué fuente se utiliza, la propia o la ajena. La postura de la comunidad internacional ha sido clara, indirectamente se pronunció por utilizar los recursos de aquellos países que, como El Salvador, poseen un ingreso nacional moderado o medio. El

gobierno de ARENA se inclina por usar los recursos de otros sin costo alguno. De ahí la insistencia del presidente Saca en continuar gozando de los beneficios de los países más pobres, aun cuando el que gobierna no lo sea. Hay que reconocer que, aun cuando los países ricos son muy egoístas e insensibles ante las necesidades de los demás, no les falta razón al pedir que los dirigentes de países como El Salvador asuman su responsabilidad y garanticen a sus ciudadanos una vida digna. En cambio, el gobierno de ARENA se muestra dispuesto a impulsar políticas sociales siempre y cuando estas, según palabras del presidente Saca, no sean una carga; pero no para el país como un todo, sino para quienes se han enriquecido a sus costillas con las políticas neoliberales. Por eso, sostuvo implícitamente Saca en su intervención, el financiamiento debe provenir de las fuentes externas, de otros gobiernos y de inversionistas extranjeros, y debe ser concedido de forma gratuita.

El plan es obtener estos recursos para cumplir las metas del milenio, pero conservando la escandalosa desigualdad actual en la distribución del ingreso nacional. Dicho de otra forma, los ricos podrán seguir enriqueciéndose sin impedimento alguno y sin cumplir con sus responsabilidades sociales, pues no tributan de acuerdo con sus ganancias y a su patrimonio, aun cuando con frecuencia, algunos de ellos hablan de responsabilidad social; mientras la comunidad internacional financia los programas sociales del gobierno de ARENA. Las medidas neoliberales son, en la práctica, para beneficio exclusivo de un reducido grupo de grandes capitalistas, tal como se constata en la legislación que las fundamenta. Es muy poco lo que se logra derramar de su insaciable vaso. Por eso, el presidente Saca reclamó la asistencia técnica y financiera para países de renta media como El Salvador. Irónicamente, en su postura se vislumbra cierta envidia, pues considera injusto que se condone la deuda de los países pobres, mientras que a los responsables, como El Salvador, no se les otorga un beneficio equivalente. En consecuencia, el presidente Saca reclamó un reconocimiento internacional, traducido en asistencia técnica y financiera, por la fidelidad del gobierno de ARENA al modelo neoliberal.

En términos políticos, pues, el mes de septiembre cerraba con una campaña electoral tenue pero constante, unas irregularidades en el manejo de la cosa pública y una hipócrita posición gubernamen-

tal ante la comunidad internacional. Por otro lado, en materia económica, el asunto más notorio ha sido, sin duda, las sostenidas alzas en los precios internacionales del petróleo, que ya han dejado sentir su impacto en la economía salvadoreña. Las noticias empezaban desde el primer día del mes: representantes de la Asociación Salvadoreña de la Industria Petrolera (ASAPETROL) anunciaban que la gasolina y el diesel experimentarían significativas alzas debido al impacto generado por el huracán Katrina en las refinerías ubicadas en el suroeste de Estados Unidos. Muchos sectores nacionales mostraron su preocupación y el gobierno se aprestó a lo que parecía imposible: buscar petróleo barato en Venezuela. Días después, el 6, la cúpula de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) anunció su respaldo a las iniciativas del Ministerio de Economía para encontrar petróleo más barato, incluida la incursión a Venezuela. "Tenemos toda la confianza puesta en la ministra de Economía, en que va a interponer sus mejores oficios para conseguir petróleo más barato", dijo el director ejecutivo de la gremial empresarial, Raúl Melara.

Mientras tanto, los empresarios del transporte anunciaron un nuevo incremento en los costos del pasaje, como respuesta a las alzas de los precios del diesel. La directiva de la Coordinadora Nacional del Transporte (CNT) se reunió con el ministro de Obras Públicas, David Gutiérrez, para negociar esa presunta nueva alza. Rodrigo Contreras Teos, vocero de la CNT, expresó la necesidad de incrementar la tarifa a 30 centavos en el pasaje en la zona urbana y un alza del 50 por ciento en los autobuses interdepartamentales. Pero el ministro de Obras Públicas no dio una respuesta definitiva a la petición; únicamente dijo que la tendría en consideración.

El día 9, el rector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), Roberto Artavia, dijo, desde Costa Rica, que la estrategia que están realizando los gobiernos del área para frenar las constantes alzas a la factura del petróleo no son las más adecuadas. "Me encantaría ver que así como salen todos los gobiernos a renegociar la factura, se pudiese ver cuáles son los megaproyectos de energía de fuentes renovables en que van a basar su cambio estructural", sostuvo Artavia. El académico criticó la búsqueda de precios preferenciales, la aplicación de medidas de ahorro y las políticas de regulación en el mercado, ya que solo son medidas "paliativas", pero no estructurales.

Transcurridos los primeros días del mes se hicieron efectivos los incrementos en el país, llegando el precio de la gasolina súper, regular y el diesel a 4.08, 3.99 y 3.01 dólares, respectivamente, en algunas gasolineras. Afortunadamente, no todos aplicaron el incremento de inmediato, pero lo harían en las sucesivas semanas. Los distribuidores locales del producto se escudaron en el impacto causado por el huracán Katrina en el golfo de México. Otras medidas anunciadas por la cartera de Economía para minimizar el consumo de combustibles incluía la creación de ejes preferenciales para la circulación de vehículos, una campaña de ahorro, la eliminación de los impuestos a la importación de autos que funcionan indistintamente con gasolina o gas y una modificación en la ley de hidrocarburos que permita la creación de expendios de gas. La medida más aventurada fue el envío de una comisión especial a Venezuela en busca de precios preferenciales.

Hay que hacer notar que el incremento en los precios de la gasolina y el diesel comenzó a limitar la capacidad adquisitiva de los salvadoreños. Quienes se conducen en vehículo propio tuvieron que destinar una mayor cantidad de dinero para el abastecimiento de combustible, mientras que los que viajan en autobús se enfrentan a las constantes amenazas de aumento de la tarifa por parte de los empresarios. Esto es solo una dimensión del problema. También pudiera suceder un incremento en los precios de los bienes que se venden en el mercado local. Esto se debería a que las empresas comerciantes estarían pagando un mayor costo de transporte (flete) por los productos que ofrecen en el mercado.

Las malas noticias económicas también vendrían de fuera. El día 2, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció sus estimaciones de crecimiento centroamericano en 3.4 por ciento, debajo del 3.7 por ciento experimentado en el 2004. El BCIE aseguró que El Salvador se coloca al sótano en las proyecciones de crecimiento, pues el mismo sería de 2 o 2.5 por ciento debido a la dolarización aplicada en el país. El organismo sostuvo que en el país "las exportaciones no han respondido como lo han hecho en el resto de países", ello a pesar de que el gobierno de Francisco Flores prometió que uno de los beneficios de la Ley de Integración Monetaria, que legaliza la dolarización, sería, precisamente, el repunte de las exportaciones nacionales.

No solo lo anterior. Además, el primer día del mes, *La Prensa Gráfica* reveló datos del informe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto, de la Asamblea Legislativa (UASP) sobre la ejecución del presupuesto general durante el primer semestre del año. El informe concluye que "es demasiado alto el retraso en la inversión, y esto refleja que no se cumplirán las metas de ejecución, a pesar de que se realice una reprogramación". De acuerdo con el análisis, el Ejecutivo solo ha invertido el 26.2 por ciento de todo lo que se ha propuesto para el ejercicio fiscal de este año. La fuente periodística cita al presidente Saca, quien consideró que el informe es desfasado. "Ese informe no está actualizado. Faltan datos de julio, faltan de agosto, lo cual hace crecer la inversión pública", aseguró el mandatario. Por el contrario, el legislador del FMLN, Gerson Martínez, sostuvo que "es un indicio de clara incompetencia técnica e insensibilidad social al no ejecutar".

El tema del presupuesto sería retomado hasta el final del mes, cuando el día 29, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, presentó los detalles del presupuesto general del Estado correspondiente al año 2006, el cual asciende a 3,338 millones de dólares, incrementándose en un 11.6 por ciento con respecto al presupuesto en ejecución. Pese al incremento en el monto total, la inversión pública, con 464 millones de dólares, será menor a la actual, que es de 510 millones de dólares. La tercera parte del presupuesto, es decir, 1,076 millones de dólares, será financiado por emisión de bonos y préstamos, lo cual acarrió una serie de críticas desde varios sectores. "Tenemos una preocupación muy clara de la crisis financiera del Estado por la administración de ARENA", dijo el legislador del FMLN, Salvador Arias. Pese a las críticas que generaron las proyecciones de endeudamiento, el presidente Antonio Saca aseguró que el 38.5 por ciento de deuda del país con respecto a su PIB "es una situación manejable". Cabe mencionar que el Banco Mundial establece como máximo un 40 por ciento del PIB el endeudamiento de los países. Ese mismo día, el director ejecutivo del Fondo Solidario de Salud, FOSALUD, Ricardo Lara, aseguró que, entre el 1° de enero y el 27 de septiembre de 2005, se había recaudado un total de 6.5 millones de dólares como producto del impuesto al tabaco, el alcohol y las armas de fuego, única noticia optimista en materia económica.

En lo tocante a los temas sociales, hay dos que vale la pena rescatar de septiembre: el debate que se siguió a la presentación oficial del *Informe de Desarrollo Humano de 2005* y la situación de emergencia nacional y alerta que vivió el país por las constantes lluvias y la amenaza de erupción del volcán de Santa Ana o Ilamatepec. En cuanto a este último asunto, prácticamente todo el mes fue de observación y de espera. El primer día de septiembre, *La Prensa Gráfica* reseñaba que “los expertos que vigilan la actividad en el volcán de Santa Ana no se atreven a pronosticar aún una erupción, aunque advierten que las emanaciones de gas han alcanzado un ‘nivel significativo’”. El 5, los técnicos que vigilaban la actividad del Ilamatepec confirmaron la presencia de magma en las entrañas del mismo. “Durante la semana pasada logramos con los colegas de la UES [Universidad de El Salvador] llegar a la conclusión de que hay magma”, aseguró el director de geología del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), Carlos Pullinger. La emergencia vendría por otros rumbos. Un día después, las fuertes lluvias que cayeron sobre la zona central y occidental del país provocaron la muerte de por lo menos siete personas, todas en el Área Metropolitana de San Salvador, debido a desprendimientos de tierra que sepultaron sus humildes viviendas.

El 14, el director del Comité de Emergencia Nacional (COEN), Mauricio Ferrer, sintiéndose acosado por la prensa, aseguró que por la probabilidad de que el Ilamatepec entrara en una fase eruptiva, se habían habilitado 32 albergues en Sonsonate y Santa Ana para atender a los potenciales evacuados. Pero, al día siguiente, *La Prensa Gráfica* reveló que, tras una visita de ese medio de prensa en algunos de los albergues que se aseguró estaban listos, ni siquiera sabían que habían sido elegidos para tales fines. Otros, que sí sabían, no contaban con el equipamiento necesario, con lo cual quedó en entredicho la palabra de Ferrer.

El 15, mientras en el país se realizaban los actos alusivos a la Independencia, un centenar de pobladores de un poblado cercano al volcán de Santa Ana abandonaron sus viviendas, sin contar con la ayuda del COEN. “La iniciativa de la evacuación fue de toda la comunidad, como una manera de prevención y no esperar hacerlo hasta que suceda algo”, dijo el presidente de la comunidad, Adilson Calderón, a los periodistas que le entrevistaron. En los alrededores solo quedaron los hombres para resguardar las pertenencias familia-

res. Un día después, el 16, Ferrer negó categóricamente cualquier ayuda gubernamental a los evacuados de las faldas del volcán. “No se siente ninguna responsabilidad porque es una evacuación por voluntad de la comunidad, o porque algunas organizaciones les han dicho que se vayan”, dijo el funcionario de gobierno, mientras unas 98 personas, la mayoría mujeres y niños, se albergaban en una iglesia de Izalco. “No hemos dado orden de evacuar porque sabemos que las condiciones del volcán no son para evacuar todavía”, concluyó Ferrer.

Pero hasta el día 18, pese al lineamiento institucional que les negó la asistencia, al menos cuatro instituciones adscritas al COEN, Fuerza Armada, PNC, Ministerio de Salud y Cuerpos de Socorro, habían atendido a las personas que, por voluntad propia, habían evacuado el cantón San Blas, el asentamiento urbano más próximo al cráter del Ilamatepec que intensificaba su actividad. Por otro lado, hasta el 22 de septiembre, el COEN había subido la alerta a amarilla debido a las lluvias provocadas por el Huracán Rita. Empezaron las evacuaciones de decenas de familias que viven a orillas de los ríos. Un día después, la alerta se incrementaba, aumentando a color naranja, debido a la persistencia de las lluvias y la saturación de los suelos. Con la declaratoria de emergencia continuaron las evacuaciones de familias que viven en sitios catalogados como de alto riesgo. El 25, el COEN bajó la alerta nuevamente a amarilla, pero esperando la entrada de una nueva onda tropical. Las intensas lluvias del día siguiente anegaron prácticamente las principales calles de San Salvador, sobre todo la exclusiva zona de San Benito y la zona baja de La Vega y Candelaria. Horas antes, el COEN había bajado a verde nuevamente la alarma, pero la volvería a incrementar. Las lluvias mostraron una vez más que el sistema de acueductos y alcantarillados de la principal urbe salvadoreña está aquejado de varios problemas —estructuras viejas, a punto de colapsar; tragantes tapados por la mala costumbre de arrojar basura a la calle— que pueden sintetizarse en una palabra: descuido. Pese a ello, el problema de la limpieza de los tragantes se ha tratado de una manera vergonzosa. Prácticamente, nadie —léase alcaldía capitalina, Obras Públicas y ANDA— ha querido asumir responsabilidades. Estas dos últimas entidades siempre han dicho que la limpieza no les corresponde a ellas, sino a la alcaldía. Esta, a su vez, afirma que esta tarea le compete a la cartera de Obras Públicas.

Estas conductas tienen dos explicaciones. Una es de carácter económico. Asumir la limpieza de los tragantes necesita de mucho dinero. Y parece que cada entidad, sea estatal, municipal o autónoma, está cuidando su presupuesto. Son entidades de servicio público, pero no quieren gastar en algo que servirá al interés público. Mejor que lo hagan otros. La otra explicación es de carácter político. Es conocida la disputa entre la comuna capitalina, en manos de la izquierda desde hace varios años, y el gobierno central. Pero la realidad actual no admite ese tipo de mezquindades. Preocupados por las inundaciones causadas por el mal estado de los acueductos de San Salvador, el gobierno y la alcaldía capitalina comenzaron, en septiembre, un inusitado acercamiento para proclamar su voluntad de aunar esfuerzos para resolver estos problemas. Según el acuerdo verbal, ambos coordinarían sus recursos para enfrentar la repetida situación de emergencia causadas por las lluvias, aunque, como lo decía *El Diario de Hoy*, en su edición del 24 de septiembre, “abordarán a largo plazo el tema de los drenajes y desagües”.

Según el alcalde Carlos Rivas Zamora, la reparación de los drenajes de la capital será un proceso largo —el edil calcula que tomará dieciocho años— y su costo será mayor a los 300 millones de dólares. Los drenajes capitalinos, como se sabe, datan de 1920 y no han sido cambiados desde entonces. Los habitantes de las zonas más pobres de la capital pagan con su inseguridad los costos de la ausencia de una estrategia de desarrollo urbano de largo alcance. El acuerdo anunciado entre el gobierno y la alcaldía de San Salvador resulta histórico. Al parecer, ambos han optado por lo más sano: dejar de lado las diferencias partidarias y asumir su rol de entidades públicas. Sin embargo, la noticia debe tomarse con cautela. Más allá del anunciado esfuerzo por evaluar toda la estructura de drenajes y desagües, hay que tomar medidas concretas. Y, sobre todo, hay que definir quién desembolsará el dinero para los trabajos de limpieza y reparación. Este ha sido el eterno problema, pues nadie ha querido afrontar los costos, con todo y que el dinero —sea el del gobierno central, sea el de la alcaldía— proviene de los impuestos de los contribuyentes. El acercamiento es encomiable, pero se impone el escepticismo: debe tomarse como uno de tantos ofrecimientos que los partidos políticos hacen a la población en épocas de crisis, mientras los actores involucrados no prueben, con hechos, lo contrario.

En segundo lugar, hay que abordar la discusión que siguió a la presentación oficial del *Informe de Desarrollo Humano*, actividad que tuvo lugar el 8 de septiembre, con la presencia de la vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar y Beat Roh, representante residente del PNUD y coordinador del sistema de Naciones Unidas en el país. Al acto asistieron también miembros del cuerpo diplomático, representantes de organismos de cooperación, jefes de las agencias de Naciones Unidas, funcionarios de gobierno y líderes de opinión. De acuerdo con la nota de prensa del PNUD, “el Informe [...], una de las publicaciones más prestigiosas a nivel mundial en los temas de desarrollo, pide cambios drásticos y rápidos en término de políticas mundiales de ayuda, comercio y seguridad, a fin de cumplir con las promesas hechas por la comunidad internacional durante la reunión de los líderes mundiales que se celebró cinco años atrás y en la que abordaron estos problemas. El Informe revisa este año el lugar crucial que ocupa la ayuda financiera como apoyo al desarrollo humano y presenta una agenda para mejorar la calidad de la ayuda”.

De acuerdo con la fuente, “en ese mismo acto, el coordinador del Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, William Pleitez, mostró los vaivenes de la ayuda internacional a El Salvador en los últimos cuarenta años. Pleitez también se refirió al desigual tratamiento comercial que padecen los países más pobres. ‘Las ventas al detalle de café aumentaron de 30 billones de dólares en 1990 a 80 billones de dólares en 2003, pero los exportadores de café únicamente recibieron 5.5 billones de dólares comparados con 12 billones de dólares en 1990’, explicó. De acuerdo con el Índice de Desarrollo Humano, El Salvador está instalado en la franja de los países de desarrollo medio, ocupando la posición 104 entre los 177 países considerados este año”.

Valga decir que el informe del PNUD, titulado “La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual”, ha dejado un sabor amargo por todos lados. Y no es para menos porque es un fuerte cuestionamiento hacia la efectividad de las políticas gubernamentales para lograr las llamadas metas de desarrollo del milenio. En México, por ejemplo, implicó un severo cuestionamiento a la credibilidad del gobierno del presidente Vicente Fox. Indudablemente, el contenido del informe fue el plato fuerte de la sexagésima Asamblea General

de las Naciones Unidas. Resulta llamativo el optimismo que caracterizó al discurso que dirigió el presidente Elías Antonio Saca en lo tocante al tema de las metas del milenio. En la alocución del mandatario salvadoreño hay una lectura de la situación del país que es muy similar a la de su predecesor en el cargo, Francisco Flores.

La tesis general es, citando textualmente, que “con grandes esperanzas, El Salvador se encamina paulatinamente a cumplir la mayor parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. Para ello, el presidente citó una serie de indicadores que mostrarían los avances en términos de desarrollo humano en el período comprendido entre 1991 y 2004. En beneficio de su tesis, Saca también aprovechó para presentar el programa gubernamental “Oportunidades”, es decir, el actual plan social de su administración. Pero este planteamiento se contrapone, de hecho, con la tesis del informe: “mientras los gobiernos se preparan para la cumbre de la ONU 2005, el informe general de avances es deprimente. La mayoría de los países están mal encaminados para cumplir la mayor parte de los ODM. El desarrollo humano está tambaleando en algunas áreas cruciales y las desigualdades que ya eran profundas siguen aumentando. Muchos discursos diplomáticos y términos corteses intentan dar cuenta de la diferencia entre el progreso en desarrollo humano y la ambición plasmada en la Declaración del Milenio; sin embargo, ninguno de ellos debería empañar una verdad muy simple: no se está cumpliendo la promesa hecha a los pobres del mundo”.

Hay que admitir que el presidente Saca hizo un esfuerzo por fundamentar su optimismo. Aunque no hizo un análisis exhaustivo de la situación socioeconómica actual (el discurso tocó una variedad de temas, que abarcaron desde el problema de la delincuencia, la cooperación internacional, la situación de Palestina y Taiwán, entre otros), el presidente aportó un par de indicadores interesantes. “En el país se ha reducido la proporción de personas en pobreza extrema en 18 puntos porcentuales entre 1991 y 2004, pasando del 33 al 15 por ciento, con lo que este indicador se ha reducido en más de la mitad. La tasa de mortalidad infantil (en menores de un año) ha experimentado una sensible disminución de 45 por mil nacidos vivos en 1991 a 25 en 2004, significando una reducción de veinte puntos y haciendo necesario un esfuerzo adicional de diez puntos”. Esos son los datos que aportó Saca en su discurso.

Los datos resultan escasos como para afirmar convincentemente que el país se acerca a los objetivos de desarrollo del milenio. No cabe duda que son importantes, pero estos objetivos son mucho más complejos y envuelven más aspectos de los que pudo haber tocado el presidente en el tiempo que duraron sus palabras en el principal foro mundial. Además, también podría objetarse la perspectiva desde la cual se concibe el crecimiento de las variables. Se parte del período comprendido entre 1991 y 2004, es decir, se toma como referencia la primera administración de ARENA, encabezada por Alfredo Cristiani, hasta la cuarta presidencia consecutiva de dicho partido, con Francisco Flores. Implícitamente, se sitúa a ARENA como el artífice de las mejoras en desarrollo humano. Al contrastar estos datos con los que proporciona el PNUD puede relativizarse la visión optimista del país que se presentó ante las Naciones Unidas. Visto globalmente, El Salvador no aparece con logros sustanciales en desarrollo humano. Incluso, al comparar los indicadores de 2005 con los de 2004, el país, que ocupaba el centésimo tercer puesto de un total de 177 naciones, descendió a la casilla número 104.

En términos generales, el documento afirma que el país no ha evolucionado sustancialmente en términos de desarrollo humano desde 2000: más bien, se ha mantenido estático. Esto contrasta con el largo período mencionado en el discurso presidencial, que es de trece años. Por lo tanto, los avances existentes aparecen como más sustanciales por cuanto el período analizado es mayor, pero se obvia la lentitud o el estancamiento en los indicadores de desarrollo humano, cosa que se aprecia a la perfección al examinar períodos más cortos, como por ejemplo, el quinquenio anterior. El documento del PNUD destaca un elemento muy importante que el presidente no tocó en su discurso: El Salvador tiene una brecha de desigualdad económica más amplia que en el resto de Centroamérica. El índice de desigualdad es de 53.2 por ciento, haciendo que casi la quinta parte de la población (el 19 por ciento, para ser precisos) viva con tan solo un dólar al día.

Por tanto, se encuentran aquí dos interpretaciones distintas sobre la pobreza en el país: una, que destacan ante todo y sobre todo los avances en algunos rubros a lo largo de un período superior a una década, que es, por cierto, el período que comienza, justamente, con los dos últimos años de la guerra y el relativo auge económico posterior a la

firma de la paz. Al contrastar el estado de los indicadores de desarrollo humano de un país, que en 1991 todavía estaba en guerra, con los de 2004, cuando el mismo país ya tiene más de un decenio de haber superado el enfrentamiento armado, es evidente que la lectura no puede ser menos que optimista. Sin embargo —y esto es lo interesante de la lectura del PNUD—, el ritmo del desarrollo humano en el país es demasiado lento, cuando no inexistente. Esto lleva una señal de alarma al actual gobierno, puesto que pone de manifiesto la necesidad de invertir aún más en desarrollo humano. El gasto social todavía no es un rubro de inversión prioritario en las políticas públicas.

Es importante afirmar esto, porque las perspectivas inmediatas de crecimiento económico son bastante sombrías, mientras la crisis provocada por el alza a los combustibles no tenga una salida viable —únicamente se tienen promesas y muestras de buenas intenciones, tanto por parte del gobierno, como de la oposición de izquierda—, es evidente que los pronósticos de crecimiento deberán ser reservados. El informe del PNUD hace un fuerte reclamo a los gobiernos, en el sentido de que estos deben pasar de los discursos floridos a los compromisos efectivos. De lo contrario, como se afirma en el documento, esta generación de líderes mundiales pasará a la historia como gente que tuvo en sus manos la posibilidad de derrotar el problema de la pobreza y no lo hizo. Hay que asumir la realidad de pobreza existente, en vez de tratar de ocultarla, aunque sea usando datos e indicadores.

Para cerrar, septiembre también ilustró lo que muchos, sobre todo dentro del FMLN y entre quienes se han escindido de ese partido, no quieren aceptar: una perspectiva sombría para la izquierda en El Salvador. La principal debilidad de las formaciones de izquierda que han irrumpido en el escenario político de la posguerra radica en que han intentado, como estrategia básica de sobrevivencia políticoelectoral, arrebatarle votos al FMLN. No han buscado ser una opción más de izquierda, dispuestas a ocupar, junto con otras, un espacio político que ciertamente puede ser más amplio en términos de partidos y de electores, sino que pretendieron desplazar al FMLN, es decir, ocupar su lugar, quedándose con sus votos y con su cuota de poder. Como resultado de ello, sobrevino el fracaso político. Y, a tono con estas experiencias de fracaso, se impuso la tesis de que en El Salvador no había más espacio en la izquierda para otro partido que no

fuera el FMLN y que cualquier formación política de izquierda —desmembrada o no del FMLN— estaba condenada a desaparecer.

Este razonamiento ha sido usado por muchos para interpretar la situación y perspectivas del Frente Democrático Revolucionario (FDR), el nuevo proyecto de izquierda que ha emergido de la más reciente crisis del FMLN. Para quienes no ven con buenos ojos su surgimiento, este partido en proceso de legalización no tendrá un futuro distinto al del PD y al del Movimiento Renovador. Y no será de otro modo —dicen— porque se trata de un partido que, además de contar en sus filas con figuras que han traicionado la causa revolucionaria y que se han vendido a la derecha neoliberal, pretende —al igual que hicieron socialdemócratas y renovadores— hacerse de una parte del caudal electoral del FMLN, lo cual ha mostrado ser un propósito condenado al fracaso.

Es posible que esta lectura sea correcta. Sin embargo, es útil intentar otro tipo de análisis, aunque sea solo por el afán de explorar otras formas de ver la dinámica de la izquierda salvadoreña. Para comenzar, hay que preguntarse por el carácter del FDR, es decir, por su identidad como proyecto político. Se trata, sin duda, de un partido de izquierda, pero no de una izquierda que adversa los principios fundamentales del FMLN. Para el FDR, lo que está en cuestión no es el proyecto efemenista, sino la cúpula que lo dirige; es el rechazo a la cúpula del FMLN lo que ha llevado a cuadros importantes del partido a fraguar un nuevo proyecto político. Esta situación tiene aspectos novedosos, si se la compara con la que llevó a la formación, por ejemplo, del PD. Este último puso en tela de juicio el proyecto efemenista; de hecho, quiso ser un proyecto destinado a reemplazarlo, lo cual explica en parte su fracaso. El FDR viene a ser una especie de intento por recuperar lo mejor del FMLN —por lo menos en la intención de quienes le quieren dar vida—, y que no puede expresarse por el férreo control ejercido sobre los militantes y mandos medios por la actual cúpula del partido.

En el FDR, pues, el asunto es bastante claro: el problema en el FMLN es la cúpula; es su intransigencia, su intolerancia y su ansia de control lo que ha obligado a muchos de sus cuadros —que no han renegado de sus ideales democrático-revolucionarios—, a buscar refugio en un proyecto en el cual los intereses de la cúpula no sean una camisa

de fuerza para los militantes. Desde el FMLN, las cosas también son bastante claras: al FDR no solo han ido a parar los ambiciosos y renegados, los que le hacen el juego a la derecha, sino que se trata de un proyecto político condenado a desaparecer. Es claro que la lectura del FMLN es simplista y cómoda. Más aún, es peligrosa para sus perspectivas electorales, porque pierde de vista la posibilidad de que, al contrario de lo que sucedió con el PD y el Movimiento Renovador, el FDR sí logre arrebatarle un número significativo de votos en las próximas o en las siguientes elecciones. Obviamente, aceptar esta eventualidad supone aceptar que el malestar en torno a la forma cómo es conducido el partido —esgrimido por muchos de los que han dejado el FMLN y se han integrado al FDR— pueden haber llegado a la militancia, bases y simpatizantes del partido.

No se ven señales de que la cúpula efemelecionista esté dispuesta a hacerse cargo, ni siquiera por mera prudencia, de una situación como la apuntada. Por tanto, no se ve cómo el FMLN pueda prepararse con realismo no solo para ceder parte de su caudal electoral a otro partido de izquierda, sino para seguir siendo un actor político decisivo con un voto de izquierda dividido. Con un panorama como el esbozado, las perspectivas políticas de la izquierda —la que se aglutina en torno al FMLN y la que se sitúa fuera de él— son francamente sombrías.

Para finalizar, hay que traer a cuenta un asunto que quedó pendiente durante septiembre: la vulnerabilidad social de los salvadoreños. Y es que no es necesario ser especialista para afirmar con propiedad que El Salvador es ahora tan vulnerable como ayer a las lluvias y todo tipo de desastres naturales y siconaturales. La experiencia y el sentido común les dice a los salvadoreños, especialmente a los más expuestos a los desastres, que hoy las precipitaciones de lluvia causan más impacto que hasta hace unos años, que el agua corre descontrolada sobre las calles y avenidas de la zona sur de la capital al desbordarse el Acelhuate y sus afluentes, que las débiles edificaciones de los pobres colapsan ante la fuerza del agua y los sismos, que hasta la exclusiva zona de San Benito, al poniente de la ciudad, se ha visto afectada por las lluvias; en fin, que no se ha avanzado mucho en la gestión de riesgo desde el último desastre provocado por las inundaciones y los deslaves causados por el Mitch, en 1998, y el daño causado por los terremotos de 2001.

Los salvadoreños han aprendido, sin necesidad de leerlo en los manuales de sociales o geografía, que el territorio donde viven es altamente vulnerable. Lo han aprendido por experiencia. De ello no hay duda, sobre todo para quienes viven en las zonas catalogadas como de alto riesgo: orillas de los ríos y quebradas, laderas de cerros y volcanes y las zonas costeras y bajas altamente vulnerables. El sentido común, más que los datos de la ciencia y de la técnica, les dice a los salvadoreños que viven en un territorio altamente vulnerable. Y la naturaleza se encarga de recordarlo constantemente. Sin embargo, culpar a la naturaleza —como lo hacen ingenuamente muchos afectados, descaradamente las autoridades gubernamentales y algunos medios de comunicación que las secundan— es una salida fácil que habla del determinismo más burdo del que se echa mano según la conveniencia.

En contra de esta idea tan extendida en el medio salvadoreño, hay que repetir hasta la saciedad que los desastres no solo son naturales y que se deben, en gran medida, a la presión irresponsable y desmedida del ser humano sobre el medio ambiente natural y a la ausencia de políticas de gestión de riesgo dentro de las esferas gubernamentales, locales y centrales. Obviamente, esto va más allá del sentido común y sugiere una cierta mirada crítica sobre la conducción de las emergencias por parte de las autoridades. El 27 de septiembre, un día después de que una fuerte tormenta azotara la capital salvadoreña y el occidente del país, se leía en un reporte de la agencia internacional de noticias ACAN-EFE: “la lluvia que cayó hacia las 15.15, hora local del lunes (21.15 GMT), duró menos de una hora, pero fue suficiente tiempo para que inundara varias zonas de alto riesgo, hiciera colapsar calles principales y cortara el servicio eléctrico de varias localidades. Además —prosigue la fuente—, derribó decenas de árboles y postes de distribución de energía y de teléfono”. La nota de prensa concluye: “la semana pasada las lluvias ocasionadas por los efectos indirectos del huracán ‘Rita’ dejaron al menos tres muertos y 150 familias evacuadas en este país centroamericano”. La prensa nacional tampoco fue ajena a los hechos. La televisión presentaba esa misma noche las impresionantes imágenes del agua desbordándose del Acelhuate y corriendo por la zona baja de la capital a la altura de los barrios La Vega y Candelaria. Durante los días siguientes, los medios de prensa hicieron también lo suyo. Uno de ellos, *La Prensa Gráfica*, introdujo una breve columna de análisis

que es pertinente rescatar. En dicho espacio se cita un informe ("Análisis de riesgo por inundaciones y deslizamientos de tierra en la microcuenca del arenal Montserrat") financiado por el gobierno de Holanda y calzado por los logotipos del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET) y el Centro Nacional de Registros (CNR).

En el estudio, de conocimiento del gobierno, se señala que "el riesgo por inundaciones y deslizamientos de tierra en la microcuenca Arenal de Montserrat, ha aumentado debido al crecimiento urbano dentro de la cuenca. La capacidad de infiltración del agua precipitada ha disminuido y aumentada la escorrentía superficial; ya que con una precipitación mayor de 33 milímetros algunos puntos del cauce del canal en la zona baja no son capaces de evacuar el agua lluvia; este dato de precipitación en décadas pasadas era mayor para se [sic] sucedieran tales rebalses, no obstante la época lluviosa siguen siendo normales (con excepción de los huracanes donde las intensidades son mucho mayores). Las zonas más frecuentemente inundadas (a más de 50 mm por hora) son el barrio La Vega y Candelaria. Cuando las precipitaciones son mayores a 90 milímetros por hora se tienen problemas en el área de la Feria Internacional". El documento señala justamente las zonas afectadas por las lluvias del pasado lunes.

El periodista del citado medio escrito señala con sobrada razón que "resulta cuanto menos curioso que, sabiendo que cuentan con el aplauso gratuito de algunos medios de comunicación, altos responsables del Ejecutivo —en especial de los ministerios de Obras Públicas y de Gobernación— sigan mostrando su sorpresa por lo ocurrido el lunes y quieran vender la idea de que se trató de un cuasi irrepitable diluvio. Extraña —continúa el periodista— porque ese estudio, que el Ejecutivo conoce o debería conocer, puntualiza con lujo de detalles que eso iba a suceder. Analiza con rigurosa exactitud la capacidad hidráulica de cada una de las bóvedas y calcula cuánta agua debe caer para que haya inundaciones".

De acuerdo al informe —presentado en diciembre de 2003—, el avance de la urbanización en las zonas comprendidas en la microcuenca y la falta de mitigación podrían agudizar la problemática. Además, propone las siguientes recomendaciones que contrastan con la realidad: "(1) Desarrollar las capacidades de análisis del riesgo a nivel de todas las instituciones involucradas, para la toma de decisiones en Ordenamiento y Desarrollo Territorial. (2) Adecuación de la Legislación a fin de que pueda ser aplicada en los planes de desarrollo de infraestructura y de uso del suelo. (3) Planificación ordenada de obras civiles o de modificación de la condición natural; como el cálculo de caudales al cambiar el uso del suelo para estimar cuanta más agua se tendrá en la parte baja de la cuenca o en puntos específicos; para evaluar cuanto hay que ampliar el canal asumiendo que a futuro se tendrá mayor cobertura de infraestructura (uso proyectado del suelo con alta o baja densidad). (4) Como solución inmediata, ubicación de familias en áreas con alto riesgo y ampliación del canal de drenaje, para el caso de las inundaciones. (5) Establecer dentro de los programas educativos los conceptos del ordenamiento y desarrollo del territorio; así como de la amenaza, vulnerabilidad y riesgo para que el alumno tome conciencia de la importancia de ello y puede ser partícipe de la gestión respectiva, desde su comunidad o su ámbito laboral". Las recomendaciones son puntuales y precisas, mas no su aplicación.

En definitiva, los habitantes de la capital y, en general de todo el país, siguen siendo más vulnerables a los desastres en la medida en que las poblaciones y la urbanización crecen, y las autoridades no hagan uso de una eficaz política de gestión de riesgo. De nada sirven los costosos estudios como el mencionado líneas arriba y otros existentes, si falta voluntad política entre las autoridades correspondientes ni éstas no se muestren dialogantes con otros sectores de la sociedad que pueden contribuir a disminuir la vulnerabilidad de todos los salvadoreños.